

Argentina: conflictos y reconfiguraciones sociopolíticas durante el ciclo kirchnerista

Agosto de 2016

En este texto sobre el ciclo kirchnerista me ocuparé de cuatro temas. En primer lugar, me referiré a los cambios en la estructura social argentina en los últimos 15 años. En esa línea, es importante subrayar el fortalecimiento de actores sociales que habían sido castigados en la década anterior, como por ejemplo las clases medias urbanas y los sectores populares (trabajadores formales e informales), proceso ligado al crecimiento de la economía, la expansión del modelo industrial y el incremento del consumo. Sin embargo, cabe destacar que, como en otros países latinoamericanos, los sectores altos se vieron muy beneficiados por el ciclo kirchnerista.

En segundo lugar, daré cuenta de las grandes transformaciones rurales, a partir de la expansión y consolidación de un nuevo modelo agrario (agronegocios, particularmente soja transgénica), hecho que trajo como correlato la emergencia de nuevos sujetos rurales globalizados, aunque no desligados de la vieja oligarquía agraria. En esa línea, cabe destacar además la expansión de actividades extractivas y megaproyectos, así como la profundización de la transnacionalización de la economía argentina, que vino acompañada de un mayor protagonismo de las empresas transnacionales. Estos dos últimos procesos explican también el ocaso, arrinconamiento y, en algunos casos, transformación de sujetos sociales ligados a otros modelos agrario-productivos.

En tercer lugar, me referiré al campo de las movilizaciones y movimientos sociales, y me focalizaré en los conflictos centrales del ciclo kirchnerista, tales como el enfrentamiento entre las corporaciones agrarias y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las movilizaciones de las clases medias (por y contra el kirchnerismo). Luego me referiré a las periferias, esto es, las movilizaciones por fuera del campo binario, ligadas a la expansión de las fronteras del extractivismo y el acaparamiento de tierras.

En cuarto lugar, hablaré brevemente del escenario político actual y de las luchas sociales. En este sentido, importa aclarar que, en consonancia con otras experiencias del continente, el kirchnerismo tuvo una gran productividad para monopolizar el progresismo

como espacio de centro-izquierda, expulsando otras fuerzas políticas. Al mismo tiempo, promovió una interpretación del conflicto en clave dicotómica o binaria, visibilizando algunos conflictos sindicales (diversidad sexual, medios de comunicación, patronales agrarias) y expulsando de su radio de tratamiento y lectura a otros conflictos (megaminería, acaparamiento de tierras, impactos sociosanitarios del modelo sojero, incluso el narcotráfico, entre otros). Esta situación se mantiene, pese a los reveses que el kirchnerismo está enfrentando, sobre todo en el ámbito judicial.

1. Estructura social y económica. Recuperación de posiciones y vuelta a la ‘normalidad’

Los cambios y transformaciones ocurridos en la sociedad argentina durante el ciclo kirchnerista (2003-2015) son de diverso orden, tanto a nivel de estructura social como de los sujetos sociales emergentes en la dinámica de conflictos. En este apartado resumiré brevemente los cambios y reconfiguraciones de las clases medias, de los sectores populares y de los sectores dominantes.

Para comenzar, hay que decir que la Argentina de los últimos 15 años registró un fortalecimiento de *las clases medias*, a partir del aumento de la ocupación, del incremento de los salarios y la recuperación del consumo. Hay que tener en cuenta que las clases medias (urbanas), más allá de su heterogeneidad social, han jugado un rol central en la configuración de un imaginario acerca de **la excepcionalidad argentina**, como “un país más homogéneo, más igualitario”, respecto de otros países latinoamericanos más marcados por la distancia social o las grandes desigualdades. Sin embargo, esta representación se quebró durante la década de los noventa del siglo pasado, cuando, en un marco de polarización social, la Argentina vivió un retroceso de las clases medias, visible en la fragmentación intracase y en un fuerte proceso de movilidad social descendente. Esto se tradujo en el empobrecimiento de vastas franjas (sectores medios autónomos y asalariados). Provistas de un importante capital cultural, pero debilitadas en términos de capital económico y aspiraciones sociales, las clases medias fueron las grandes protagonistas de las protestas sociales durante 2001 y 2002, que derribaron a varios gobiernos. Por ello, en los últimos 15

años, esto es, durante la postconvertibilidad y con el ingreso al consenso de los *commodities*, el mejoramiento de sus posiciones económicas y el acceso al consumo no se vivió como una suerte de ‘democratización’ (como sucedió en otros países, por ejemplo, en Brasil), sino como la ‘recuperación’ de un estándar de vida y de patrones de consumo, perdidos en la década anterior (Kessler, 2016).

En esta línea, una segunda transformación asociada a la reactivación económica fue un mejoramiento de la situación de los *trabajadores formales*, gracias a la generación de empleo y al crecimiento económico. Asimismo, hubo una *reducción de sectores marginales y grupos no calificados* respecto del período anterior. Nuevamente, hay que tener en cuenta lo sucedido en el período anterior, cuando amplios sectores de la clase trabajadora urbana sufrieron un proceso de descolectivización y pasaron a engrosar parte del proletariado marginal (trabajadores informales o precarizados) o simplemente quedaron desempleados. La descolectivización masiva estuvo en el origen de una serie de movimientos de desocupados (piqueteros), que, entre 1997 y 2004, se constituyó en el gran actor social del conflicto en la Argentina, mediante cortes de ruta en todo el país y la reorganización del tejido social en los barrios populares.

En suma, el período de postconvertibilidad ilustra, al menos hasta 2011, una reversión de la tendencia dominante en la década anterior respecto de los sectores populares: aumento del empleo calificado de 17,5 % a 33,8 %, y creación de puestos de trabajo en la industria hasta 2006 y en la construcción, y luego en el sector servicios (Benza, 2016). Pero si el sector de trabajadores manuales calificados experimentó una notable mejoría y creció, la reducción de trabajadores no calificados y marginales fue menos significativa. Ciertamente, al menos hasta 2007 hubo una fuerte creación de empleo (unos 5 millones de puestos de trabajo, luego de la crisis de 2001-2002), hecho que si bien implicó una recuperación de la industria, no conllevó cambios sustantivos, pues “quedó también reinstalada la misma estructura industrial dependiente y vulnerable del pasado” (Katz, 2013).

El crecimiento de la economía y el aumento del empleo y del salario contribuyeron a una baja sustantiva de la pobreza, respecto de 2001-2002, cuando llegó al 52 %. En 2007, según informaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza se había

reducido al 20,6 % de la población, mientras que la indigencia era del 5,9 %. Asimismo, durante los 12 años de kirchnerismo se mejoró la situación de los jubilados. A partir de 2006 se amplió la cobertura previsional, que permitió a unos 2,5 millones de jubilados recibir una pensión a pesar de no haber hecho aportes. El kirchnerismo retomó la tradición democrática de paritarias libres (convenios colectivos de trabajo), perdidos durante el neoliberalismo, lo cual mejoró el salario de los trabajadores formales, públicos y privados, al compás del desplazamiento del conflicto sindical hacia el área laboral. Esto recolocó a los sindicatos de trabajadores formales como actores centrales del conflicto y, desde el punto de vista simbólico, volvió a generar cierta confianza de clase, visible en la recuperación de un 'modelo productivo' asentado en el trabajo, en contraposición al modelo financiero de los años noventa. La Confederación General del Trabajo (CGT), tradicionalmente peronista, volvió a unificarse y encolumnarse detrás del peronismo/kirchnerismo, bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe de los camioneros, uno de los sectores más beneficiados por las políticas de los noventa (a raíz del desmantelamiento de los trenes).

También es interesante observar lo sucedido respecto de la precarización: pese al aumento del empleo formal, las tasas de empleo informal continuaron siendo altas (alrededor del 30 %, cuando en 2001 era del 48 %). Por un lado, hubo una extensión del universo de la precariedad, mediante la subcontratación y tercerización, sobre todo en el área de servicios. Así, en el marco del aumento de la conflictividad sindical, no fueron pocas las luchas protagonizadas por comisiones internas contra la precarización, en ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Entre estos se destacaron el sector de servicios y transporte. Conflictos como el que ocasionaron la muerte de un militante de izquierda, Mariano Ferreyra, asesinado en una protesta contra la precarización laboral, en 2010, mostraron el costado más sombrío de la expansión de nuevas formas de desigualdad dentro los sectores trabajadores urbanos.

Otros conflictos sindicales de base que tuvieron gran resonancia fueron protagonizados por el sector público (educación y salud). Desde las huelgas de los hospitales públicos, hasta los persistentes paros del sector docente (enseñanza primaria y secundaria) en varias provincias, dichos conflictos han puesto de manifiesto el deterioro

salarial y la ampliación de las fronteras de la precariedad, en una época de prosperidad económica. El asesinato de un docente en la provincia patagónica de Neuquén (abril de 2007) a manos de la Policía provincial, así como las constantes pujas en otras provincias, revelaron la ausencia de propuestas integradoras en torno a la recuperación y revaloración de lo público, así como la dificultad de los propios sindicatos de nacionalizar los conflictos.

Por otro lado, ha persistido un núcleo duro de trabajadores en posiciones marginales (la marginalidad, tema mayor de las ciencias sociales latinoamericanas), sostenidos en parte por los diferentes programas sociales que fortaleció el Gobierno, en continuidad con las anteriores políticas gubernamentales. Este presenta particularidades según sexo, pues es más alto en las mujeres que en los varones; edad, afecta sobre todo a los jóvenes (60 %), y nivel educativo, ya que su incidencia disminuye a medida que aumenta este nivel.

Respecto de las políticas sociales en relación con los sectores más vulnerables, en 2009 se sancionó por decreto la Asignación Universal por Hijo (unificando y reemplazando así los otros programas sociales), una medida promovida desde hace varios años por partidos y organizaciones sociales progresistas opositoras, cuyo impacto sobre los sectores más excluidos fue importante, aun si su alcance estuvo lejos de ser universal.

Por último, respecto de *los sectores* altos de la sociedad, estos mejoraron sus posiciones durante el kirchnerismo, aunque hubo modificaciones, entre las cuales debemos consignar cuatro fundamentales. Primero, hubo un desplazamiento del capital financiero (típico de los noventa), hacia el capital productivo y extractivo (oportunidades que abría la reactivación de la industria, nuevo capitalismo agrario y expansión de las fronteras del extractivismo). Segundo, hubo una acentuación de la concentración y extranjerización de la economía: el proceso de extranjerización de los noventa se fortaleció a partir de 2004, con la reactivación del mercado interno, dominado por oligopolios, lo cual se vio potenciado, en el marco del consenso de los *commodities*, por la acentuación de la extranjerización en las actividades extractivas (petróleo, megaminería). Así, en la actualidad el perfil de la cúpula empresarial se destaca por la notoria presencia de firmas extranjeras.

Tercero, luego de la crisis de 2001-2002, y durante los primeros años del kirchnerismo, los sectores dominantes optaron por adoptar una estrategia de 'bajo perfil',

que consistió básicamente *en reducir la ostentación*, típica de la era menemista. Sin embargo, a partir de 2004, la reactivación del consumo y la inversión repercutió en un afianzamiento del estilo de vida ligado a la segregación espacial (urbanizaciones privadas) y a los consumos de lujo. Para decirlo de otro modo, con el ‘retorno a la normalidad’, las clases altas volvieron a recuperar la seguridad ontológica, esto es, la confianza en sí mismas, que había sido amenazada con la crisis y el *default* (2001-2002).

Cuarto, y relacionado con lo anterior, el período se caracteriza por la expansión del nuevo paradigma agrario (agronegocios), el cual ilustra la emergencia de un nuevo perfil empresarial, cuya fusión con la vieja oligarquía agraria se haría cada vez más ostensible, a medida en que el modelo de agronegocios fuera afirmándose como hegemónico. En suma, más que cambios de en los sectores dominantes, en Argentina asistimos a la emergencia de un nuevo *ethos* empresarial, ligado a los agronegocios (al menos, como modelo identitario), que reforzó la seguridad ontológica de los sectores dominantes como ‘motor’ de la economía argentina. Eso se hará notorio en la expresión genérica de ‘campo’, que alude a la nueva estructura agraria y denota la reasociación de la bonanza económica con el imaginario del país agrario.

En suma, el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en las condiciones de trabajo, ingreso y consumo de los sectores subalternos. Esto llevaría a afirmar a estudiosos como G. Kessler (2016) que dichas mejoras habrían marcado una reversión de las tendencias propias de los años noventa (*la sociedad excluyente, Svampa, 2005*), o sea, que habría habido un quiebre de la polarización social, si se compara con el período anterior. Sin embargo, dicha reducción de la pobreza no conllevó una disminución de las desigualdades. El mejoramiento de las situaciones de los sectores subalternos fue notorio, al menos, entre 2006 y 2011, época a partir de la cual el sostenido aumento de la inflación, el estancamiento en la creación de empleo privado, así como las políticas económicas implementadas potenciaron la crisis económica y trajeron como consecuencia, sobre todo en relación con los sectores populares, una licuación de las mejoras logradas. No obstante lo anterior, como es sabido, en sintonía con los últimos estudios sobre desigualdad en la región, es necesario relativizar las afirmaciones triunfalistas acerca de la reducción de los niveles de desigualdad, operadas durante la década progresista. Así, al contrario de lo

que se venía afirmando de que América Latina era la única región del mundo donde había disminuido la desigualdad, dichas investigaciones (centradas en las declaraciones fiscales de las capas más ricas de la población) muestran que, al compás de la disminución de la pobreza, la región ha conocido una concentración mayor de la riqueza.¹

Volviendo a la Argentina, más allá de los impuestos a las exportaciones agrarias y, a partir de 2008, a las mineras (entre 3 y 5 %), durante el período no se registró ninguna reforma tributaria que implicara avanzar sobre los beneficios de los sectores más poderosos. Todo lo contrario, el Estado siguió subsidiando a las empresas de servicios y de la producción, e incluso en los últimos años comenzó subsidiar a las petroleras, que amenazaban con despidos masivos, frente a la baja del precio internacional del crudo y la pérdida de ventajas comparativas. Por otro lado, el sistema tributario continúa siendo opaco, complejo y regresivo (la reducción del impuesto a las ganancias ha sido uno de los reclamos mayores de los sindicatos, porque afecta incluso a salarios medios y bajos; el IVA es del 21 %); el capital financiero no ha sido gravado ni existe un impuesto al juego (que ha tenido notable expansión en el período). Además, la nueva Ley de Tierras no afecta al proceso de extranjerización (no es retroactiva). Por último, a diferencia de otros países latinoamericanos, la reforma agraria es un tema ausente del debate.

2. Las transformaciones de la estructura agraria. Núcleo y periferias

En líneas generales, podríamos decir que en Argentina existen por lo menos tres universos agrarios: el mundo claramente hegemónico de los agronegocios; el mundo chacarero, otrora central en clave de economías regionales, aunque nunca hegemónico, y el históricamente

¹ Véase el apartado acerca de este tema en el artículo 'Fin de ciclo. Los progresismos realmente existentes'. Asimismo, véase el número especial de *Nueva sociedad*, sobre todo el artículo del economista Pierre Salama, '¿Se redujo la desigualdad en América Latina? Notas sobre una ilusión', 2015; disponible en <http://nuso.org/articulo/se-redujo-la-desigualdad-en-america-latina/>. Para una discusión sobre la forma de medición y su metodología, véase M. Medeiros, P.H.G. Ferreira de Sousa y F. Ávila de Castro, 'Estabilidade da desigualdade de renda no Brasil, 2006-2012. Estimativa como dados do imposto de renda e pesquisas domiciliares', *Ciencia & Saude Coletiva* 20 (4): 971-986.

marginalizado mundo campesino-indígena. Desde el punto de vista agrario, las lógicas de estos mundos son ciertamente diferentes, hasta contrastantes, así como la densidad, la extensión y las relaciones de asimetría instalados entre ellos.

Comenzaré por el mundo hegemónico. Existe una vasta y rica literatura que da cuenta de la emergencia del sector de los agronegocios, caracterizado por el uso intensivo de biotecnologías, de acuerdo con estándares internacionales (semillas transgénicas a través de la siembra directa), lo cual colocó a la Argentina como uno de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgénicos. Dichas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario y un salto en la escala de producción, e incrementaron notoriamente su peso relativo en las exportaciones y la economía argentina. Su vertiginosa expansión implicó una reestructuración global del sistema agrario tradicional, que ya arrastraba una fuerte crisis, agravada por la política excluyente de los años noventa. El modelo de agronegocios se extendió no solo en la región pampeana, sino también en las llamadas áreas marginales, esto es, en el norte y litoral del país, y ocupa en la actualidad unas 22 millones de hectáreas (sobre 33 millones cultivables), de las cuales el 90 % está dedicado a la soja. La rentabilidad del sector agroalimentario se vio favorecida por la salida de la convertibilidad (2002, gracias a la devaluación de la moneda local), así como por el *boom* de los precios internacionales de productos primarios.

Según Grass y Hernández (2013), las características actuales del modelo de agronegocios (que por supuesto incluye, además de la soja, otros cultivos transgénicos como el maíz, girasol, algodón y otros), serían las siguientes: transectorialidad (integración vertical y horizontal), priorización de la producción para la exportación, intensificación del papel del capital en los procesos productivos agrarios (y creciente peso del capital financiero), estandarización de las tecnologías utilizadas y acaparamiento de tierras para producción a gran escala.

El nuevo modelo agrario cuenta con diferentes actores: mientras que en el sector semillero se encuentran las grandes empresas multinacionales del sector (como Monsanto, Novartis, Singenta y Cargill)² y unos pocos grandes grupos económicos locales, en el

² Monsanto controla el 90 % del mercado de semillas transgénicas; Novartis es la primera empresa agroquímica en el mundo.

circuito de producción surgieron otros actores económicos. Entre estos se encuentran los terceristas (que cuentan con el equipamiento tecnológico), los contratistas, suerte de ‘productores sin tierra’ (entre las cuales se incluyen actores extraagrarios, como los *pools* de siembra y los fondos de inversión), y, finalmente, los pequeños y medianos propietarios, parte de los cuales se convirtieron en rentistas, que alquilan sus propiedades para el cultivo de la soja. Por otro lado, la expansión del modelo de agronegocios produjo el surgimiento de organizaciones empresariales vinculadas al sector agroindustrial, entre las que se destacan la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), así como organizaciones por cadenas. Estas últimas, a diferencia de las tradicionales (SRA, Federación Agraria Argentina o Coninagro), presentan una integración vertical que abarca desde la producción primaria hasta sectores de servicios ligados a la nueva trama productiva.

A nivel local, desde el proceso de liberalización, apertura y desregulación iniciado en 1996, en el período neoliberal se abrieron nuevas oportunidades para las grandes empresas, lo cual favoreció la concentración en términos horizontales y verticales. Así, por ejemplo, el 90 % de la venta de aceite refinado de girasol está en manos de seis empresas, que lideran Molinos Río de La Plata, Aceitera Deheza y Cargill. Asimismo, la expansión del nuevo modelo agrario se tradujo en la disminución del número de explotaciones y la reducción de mano de obra, lo cual generó un fuerte éxodo de la población rural hacia las ciudades. Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) confirman la concentración de tierras: el 2 % de las explotaciones agropecuarias representa el 50 % de la tierra; mientras que el 57 % de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen solo el 3 % (cit. en Aranda, 2013). La mutación y reconfiguración del sector contribuyó a crear un modelo de ‘agricultura sin agricultores’.

Por otro lado, la emergencia de una nueva configuración social significó también un cambio profundo en las subjetividades y actitudes de los sujetos. Para algunos especialistas, el agronegocio aparece vinculado a un nuevo tipo de empresario rural, “más de tipo schumpeteriano”, que asocia las modernas tecnologías con la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Sobre este nuevo actor ha habido un fabuloso trabajo de instalación/reinvención

identitaria, realizado por instituciones del sector, por los suplementos rurales de los principales diarios argentinos y por el INTA, que ha promovido “la segunda revolución de las Pampas”. Para Gras y Hernández (2009), que analizaron el ‘nuevo *ethos* empresarial’, el ‘empresario innovador’ ya no se identificaría con el productor, menos aún con el agricultor tradicional, sino con un estilo y una cultura gerencial basada en la flexibilidad y polivalencia cognitiva, propia del *management* moderno, orientada a la economía global.³

El pasaje dramático de un paradigma agrario a otro muestra una Argentina que ha ido perdiendo diversidad, al compás del avance del monocultivo de la soja y el acaparamiento de tierras. Una de las problemáticas de las últimas décadas ha sido la desestabilización y ocaso del **mundo chacarero pampeano** (vinculado a la agricultura y la ganadería), caracterizado por una diferente organización del trabajo y la producción, así como por otro sistema de valoraciones y disposiciones psicológicas, respecto del actual modelo de agronegocios. Este proceso de mutación y desgarramiento de las identidades se expresó también en los diferentes posicionamientos asumidos por la Federación Agraria Argentina (FAA), que nuclea a los pequeños y medianos propietarios rurales. Así, en tanto organización gremial, la FAA fue actor de las actuales transformaciones que conllevaron el ocaso del mundo chacarero que ella representaba. En razón de ello, al menos hasta 2008, esta adoptó una posición más ambigua, donde se filtraba un discurso crítico del modelo de agronegocios. Sin embargo, la confrontación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por el aumento de las retenciones al agro, llevó a la FAA a un cambio de orientación. De modo inédito, la FAA participó activamente de la mesa de enlace con las grandes organizaciones patronales (SRA, CRA, Coninagro), sosteniendo las demandas de un conjunto de actores que rechazaba el aumento de las retenciones al sector. Más aún, lejos de rechazar el nuevo modelo agrario, la FAA buscó en aquella puja con el Gobierno nacional desarrollar una mejor inserción dentro de este, para obtener mayor rentabilidad. De modo que el año 2008 señaló un ‘fin de ciclo’ para las aspiraciones críticas de la FAA, que de ahí en más apostaría a la hegemonía del modelo sojero, y se insertaría en el campo político de la oposición al kirchnerismo, al cual inicialmente había apoyado.

³ En un extremo, el arquetipo de este modelo sería el exitoso empresario argentino Gustavo Grobocopatel, quien sostuvo en innumerables oportunidades ser un “sin tierras”, afirmando con ello que la rentabilidad está ligada más a un conjunto de operaciones que a la capitalización en tierras.

Otra dificultad ha sido la histórica invisibilización de la cuestión campesina. Ciertamente, a diferencia de otros países latinoamericanos, en Argentina la hegemonía del modelo agroexportador conllevó el silenciamiento de una heterogeneidad de sujetos sociales agrarios, considerados subalternos o marginales.⁴ Será solo a mediados de la década de los ochenta, con la emergencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), que veremos una resignificación positiva del término ‘campesino’. Luego se agregarían el Movimiento Campesino de Córdoba, el Movimiento Campesino de Formosa, la Red Puna, entre otros, enrolados actualmente en el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), que surgió en 2003 y forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC). Dichos movimientos tienen como bandera la agricultura familiar, el derecho comunitario y la agroecología, y como objetivo, la soberanía alimentaria.

En 2010, el Gobierno Nacional diseñó el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 (PEA2), con el fin de alcanzar las 160 millones de toneladas de granos transgénicos (soja y maíz, en su mayoría) para dicho año (actualmente es de 100 millones), lo cual implicaría mayores desmontes, mayor desplazamiento compulsivo de poblaciones vulnerables, mayores conflictos con campesinos e indígenas, hacinamiento urbano, presión sobre los bosques nativos y pérdida de suelos, entre otros.

Por último, consignaré la situación de los pueblos originarios, tradicionalmente instalados en la periferia de la periferia. En términos históricos, dicha situación remite al rol del genocidio en la fundación del Estado-Nación, hacia fines del siglo XIX,⁵ el cual tuvo

⁴ La misma categoría de ‘campesino’ ha sido poco frecuente. En Argentina hemos conocido pequeños propietarios, productores agrarios, ligas agrarias; incluso dentro del lenguaje académico se ha hablado de *farmers*, en el marco de ciertas economías regionales, en fin, **pero pocos campesinos y mucho menos autodefinidos como tales.**

⁵ El esquema interpretativo fundacional sobre los pueblos originarios en la Argentina moderna fue la dicotomía sarmientina *Civilización o Barbarie*, que condenaba a la exclusión y exterminio a las masas consideradas bárbaras (indígenas alzados, montoneras, gauchos y caudillos levantiscos). Respecto de los indígenas, a fines de 1870 la élite política decidió como vía excluyente la opción militar, que se desplegó a través de diferentes campañas: campañas del desierto en 1879, y entre 1881 y 1885, que aplastaron la resistencia de los indios ranqueles y mapuches (La Pampa, Río Negro y Neuquén), y la campaña al Chaco (1884), que derrotó a los indios tobas y mocovíes del Chaco austral y oriental, y aseguró el control de los márgenes del río Bermejo. A esto se sumó la represión de rebeliones indígenas en la Puna y el efecto devastador que la expansión de estancias ovejeras

además un efecto invisibilizador, que alimentó la - falsa- idea de que en Argentina no había más pueblos originarios. La Constitución argentina recoge, por supuesto, la normativa internacional más avanzada sobre el tema. Asimismo, la reforma constitucional de 1994 introdujo el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y sus derechos culturales y territoriales.

En 2004-2005, un relevamiento oficial dio a conocer que en Argentina existían 600 329 personas que se reconocían como pertenecientes a un pueblo indígena, y se identificaron al menos 31 pueblos originarios. En el año 2010, el censo arrojó un número superior: 955 135, esto es, el 2,4 % de la población del país (cit. en Binstock y Cerrutti (2016). La población argentina incluye además afrodescendientes, cuya presencia ha sido igualmente minimizada. Los datos de 2010 arrojaron un total de 149 493 personas, casi todas ellas nacidas en Argentina y un 8 % aproximadamente en otros países del continente (Ibíd, 47).

3. Dinámica de conflictos. De centros y periferias

La sociedad argentina de los últimos 15 años se tornó más compleja a nivel de conflictos sociales, lo cual fue diseñando una nueva dinámica entre centros y periferias. En esa línea, en cuanto a los centros, podría afirmarse que hubo un corrimiento hacia el conflicto sindical, marcado por el ocaso de las organizaciones de desocupados y el resurgimiento de las organizaciones gremiales; en segundo lugar, hubo una irrupción de nuevos actores agrarios –modelo de agronegocios– en la escena política. En tercer lugar, las periferias estuvieron recorridas por los conflictos socioambientales, ligados a la expansión de la frontera minera y petrolera, y los conflictos territoriales vinculados al acaparamiento de tierras. De este modo, la centralidad no tuvo que ver solamente con el tipo de actor social, sino con la geografía del conflicto: en el primer caso se trataba de conflictos rurales y urbanos, visibles en las grandes ciudades y dotados de amplias ramificaciones y articulaciones sociales, con capacidad de ocupación del espacio público en la capital del

tuvieron sobre los selknam y yamanas en Tierra del Fuego. En consecuencia, la creación de la República se llevó a cabo sobre el genocidio originario, el cual tuvo un efecto demoledor sobre los diferentes pueblos indígenas sobrevivientes de la Argentina (Svampa, 2016).

país. En contraposición, los conflictos ligados al extractivismo más duro (minería, petróleo), y los reclamos de campesinos e indígenas aparecen vinculados al ámbito rural, así como a pequeñas y medianas localidades, lejanas de los grandes centros urbanos y con escasa capacidad de visibilidad en el espacio público de la capital argentina. En consecuencia, el kirchnerismo logró mantener estos reclamos encapsulados en el ámbito local o provincial, algo que fue facilitado también por la falta de articulaciones con los sectores sindicales urbanos, que al menos hasta 2012 permanecieron ajenos a dichos conflictos.

En los apartados que siguen, haré una presentación sumaria de los conflictos principales durante el ciclo kirchnerista:

3.1. Conflicto entre los sectores agrarios y el gobierno kirchnerista

La continuidad en términos de orientaciones y estilo del gobierno kirchnerista se vio cuestionada por un conflicto que se abrió en marzo de 2008, y cuya evolución y desenlace, cuatro meses más tarde, significaron un rudo golpe para el nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que a fines de 2007, la nueva presidenta aumentó las retenciones⁶ de las exportaciones de las mineras, hidrocarburos y productos agrícolas (entre ellos, la soja transgénica), elevándolas a un 35 %. El frente agrario antigobierno logró agrupar tanto a las grandes organizaciones, como a los representantes de los pequeños y medianos productores, quienes llevaron a cabo una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y *lock-out*), que dejaron al país al borde del desabastecimiento durante 100 días.

Con todas sus limitaciones y virulencias, el conflicto sirvió para difundir por primera vez en la sociedad argentina ciertos temas. Así, por un lado, gran parte de los sectores urbanos pudieron asomarse y advertir cuán grandes y profundas habían sido las

⁶ Las retenciones o impuestos a las exportaciones agrícola-ganaderas son un instrumento del Estado que existe desde los años cincuenta, y solo fueron suspendidas bajo el gobierno de Carlos Menem, para ser restablecidas por Eduardo Duhalde, en 2002, en medio de la crisis argentina y en un contexto de gran rentabilidad para los sectores exportadores. El aumento de las retenciones agrícolas, por parte de Cristina Fernández de Kirchner, tenía entre sus objetivos frenar la inflación, neutralizando el posible acoplamiento entre los precios internacionales de los alimentos y los precios del mercado interno. Recordemos que la inflación del último año ha sido alrededor del 20 %.

transformaciones que sacudieron el mapa agrario argentino en las últimas décadas. Más allá del uso genérico e ideológicamente interesado del término ‘campo’, la Argentina urbana pudo comprobar la heterogeneidad de los actores que componen el modelo agrario. Subrayemos de paso que, en su mayoría, los cortes de ruta que se multiplicaron en el país fueron sostenidos por Asambleas de autoconvocados, compuestas por pequeños productores, cuyo perfil se vio transformado gracias al nuevo modelo. Pero lo importante es que dicho conflicto puso de manifiesto el lugar central del modelo de agronegocios en la estructura económica del país.

Por otro lado, el conflicto fue un partaguas en términos políticos, pues la disputa por la renta extraordinaria fue la piedra de toque para actualizar de manera plena el legado populista. Tanto la respuesta inflexible del Gobierno como la rápida reacción de sectores de la clase medias urbanas, que salieron a la calle en apoyo de los sectores agrarios, cuestionando el estilo autoritario del Gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de carácter binario, que atraviesan la historia argentina y han anclado fuertemente en la tradición populista: Civilización o barbarie; peronismo o antiperonismo; pueblo y antipueblo. Finalmente, el proyecto del Ejecutivo fue rechazado en el Senado Nacional, gracias al voto decisivo del vicepresidente electo en favor de los sectores agrarios. Como consecuencia, en 2009 el oficialismo perdió las elecciones legislativas, aunque pronto haya recobrado la iniciativa política.

En esta línea, el esquema populista se fortaleció con dos nuevos hechos: de un lado, un nuevo conflicto, generado por el proyecto de la Ley de Medios, que enfrentó al Gobierno directamente con el multimedio *Clarín* (que, hasta antes de la disputa con los sectores agrarios había sido beneficiado por las políticas gubernamentales). Los debates sobre la nueva ley audiovisual suscitaron también la adhesión de numerosos periodistas y sectores educativos y culturales, que hasta ese momento habían mantenido una relación de apoyo tácito en relación con el kirchnerismo. De otro lado, la muerte repentina de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, terminó por abrir por completo las compuertas al populismo de alta intensidad (Svampa, 2016) en su clásica versión estatalista. Esto llevó a consolidar el discurso populista binario y las alusiones al pasado peronista, como ‘gran relato’ refundador del kirchnerismo, sintetizado en la oposición entre un bloque popular y los

sectores de poder concentrados (“monopolios, corporaciones, antiperonistas”). En este marco, el kirchnerismo amplió el arco de alianzas, a partir de la incorporación explícita de la juventud –que había tenido notoria presencia en las exequias de Kirchner–. Agrupaciones como La Campora (fundada por Maximo, hijo del matrimonio Kirchner) y otras similares comenzaron a multiplicarse por todo el paıs, al compas de una doble militancia, tanto desde altos puestos del aparato del Estado como desde las bases, marcadas por un activismo virtual, desde blogs, Twitter y otras redes sociales.

Por ultimo, el conflicto sirvio tambien para dotar de cierta visibilidad a las organizaciones campesinas e indigenas, vıctimas del desplazamiento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgenicos, en especial en el norte argentino. Sin embargo, por paradojico que resulte, las organizaciones que componıan el Movimiento Nacional Campesino Indigena (MNCI) se alinearon con el oficialismo kirchnerista. En realidad, tal como sucedio con otras organizaciones sociales –sindicatos, expiqueteros, organizaciones de DD.HH., posteriormente, organizaciones GLTTB–, el MNCI tambien fue interpelado por el kirchnerismo, muy especialmente, a partir de 2005 (cuando se efectuo la cumbre contra el ALCA en Mar del Plata) y luego del conflicto con las patronales agrarias, gracias a los diferentes programas sociales orientados al mundo campesino. Asimismo, a partir de 2008, el Gobierno comenzo a invocar la agroecologıa como paradigma alternativo, defendiendo la coexistencia entre este modelo con el de agronegocios. Ası, la perdida de autonomıa del movimiento campesino habla de su debilidad, pero su situacion no difiere demasiado de la de otros sectores vulnerables, beneficiados con polıticas sociales de caracter compensatorio, hecho que acentua la dependencia respecto del Estado y no apunta a una verdadera inclusion y autonomıa de los sujetos y las familias.⁷

⁷ Uno de los momentos de mayor tension en la inextricable relacion entre movimiento campesino indigena y gobierno kirchnerista, fue noviembre de 2011, cuando Cristian Ferreyra, campesino de la etnia Lule y miembro del Mocase, fue asesinado por sicarios de un terrateniente en la avanzada del modelo de agronegocios. A raız de ello, con el apoyo de numerosas organizaciones (entre ellos, del entonces oficialista Movimiento Evita), el MNCI impulso un proyecto de ley que tomarıa el nombre de Cristian Ferreyra, para frenar los desalojos rurales por un lapso de cinco aos, como ası tambien buscar soluciones para las disputas entre el campesinado y los empresarios del agro, para lo cual preve la creacion de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales. Al final del ciclo kirchnerista, no solo no estaba aprobada la ley Ferreyra, sino que ademas fue asesinado otro

3.2. Clase media contra clase media. La defensa ‘de lo popular’ versus la defensa ‘de la República’

Apenas un año después de la muerte repentina de Néstor Kirchner, en octubre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner fue reelegida en primera vuelta por el 54 % de los votos y recuperó la mayoría parlamentaria en el Congreso, perdida en 2009 tras el conflicto con los sectores agrarios. Esta abrumadora mayoría contribuyó a consolidar el proceso de concentración de poder en la presidenta y fortaleció su vertiginoso encapsulamiento sobre sectores de las clases medias. La ruptura de la alianza con el sindicalista líder de la CGT, Hugo Moyano, implicó un abandono de la vía del populismo clásico (la pata sindical como columna vertebral), lo cual conllevó una concentración mayor sobre los aliados provenientes de las clases medias (sectores juveniles y culturales). Así, la base de apoyo sindical del kirchnerismo quedó reducida a un sector de la Central de Trabajadores Argentinos, vinculado a las clases medias (maestros y empleados estatales) y culturales (artistas, intelectuales y académicos).

A su vez, este encapsulamiento coincidió con un nuevo quiebre del Gobierno con otros sectores de las clases medias, con los cuáles parecía haberse reconciliado, luego del conflicto con las patronales agrarias, según mostraban los resultados electorales de 2011.⁸ Por último, fiel a la tradición personalista de la política latinoamericana, el fuerte encapsulamiento del Poder Ejecutivo fue configurando un modelo extremo de presidencialismo, poco afecto al debate democrático y la tolerancia a la disidencia. En este contexto de estrechamiento de las alianzas sociales, el kirchnerismo terminó por convertirse en un populismo de clases medias que pretendía monopolizar el lenguaje del progresismo arrogándose la representación de las clases populares, vía por la cual también buscaba descalificar a otros sectores de clases medias opositores.

miembro del Mocase, en 2012, en las mismas circunstancias, esto es, por un sicario al servicio de un empresario rural.

⁸ Esto quiere decir que no pocos sectores medios urbanos y rurales que se movilizaron contra el gobierno de Cristina F. de Kirchner, en 2008, terminaron votando a favor de la reelección de la presidenta, en 2011.

El caso es que entre 2012 y 2013 sectores de clase media urbana protagonizaron masivas movilizaciones sociales, en las cuales se mezclaban diversos reclamos: el rechazo a la posibilidad de una reforma constitucional que habilitara un tercer mandato de la presidenta, las denuncias acerca de la corrupción de los funcionarios, las restricciones cambiarias y la creciente crisis económica, entre otros. Así, las manifestaciones mostraron que uno de los principales focos de polarización fue *la puja intraclase*: si desde el kirchnerismo se arrogaban la representación de las clases subalternas, en nombre de “un modelo de inclusión social”, desde la oposición, otros sectores medios movilizados criticaban el creciente autoritarismo del régimen y se arrogaban el monopolio de las banderas del “republicanismo”.⁹ Finalmente, aunque el oficialismo conservó la mitad de las provincias, las elecciones legislativas de 2013 resultaron adversas para el kirchnerismo y enterraron con ello cualquier tentativa re-reeleccionista.

En los últimos años, luego de haber logrado la desactivación de los diversos organismos de control del Estado y fundado en una amplia mayoría parlamentaria, el kirchnerismo avanzó sobre el Poder Judicial. Las denuncias de corrupción que involucraban a diferentes funcionarios no prosperaron –aunque llevaron al procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, y a la condena del exsecretario de Transporte-, como tampoco las denuncias de enriquecimiento ilícito de otros funcionarios, que incluían a la familia presidencial (recordemos que la propia fortuna de los Kirchner se multiplicó cerca del 1 000 % entre 2002 y 2015) (Oficina Anticorrupción, cit. en Jastreblansky y Ruíz, 2015).

3.3. Los ecos del extractivismo y el acaparamiento de tierras

La megaminería a cielo abierto fue un punto crucial donde naufragó el discurso progresista del kirchnerismo, muy especialmente si tenemos en cuenta que en Argentina este tipo de

⁹ Tengamos en cuenta que en 2011, apenas asumido su segundo mandato, frente a la fuga de divisas y la caída de reservas del Banco Central, Cristina Fernández anunció una serie de medidas restrictivas respecto de la compra de divisas extranjeras (cepo cambiario), que generaron inconvenientes en la importación y una profunda insatisfacción en los sectores medios, acostumbrados a dolarizar sus ahorros

actividad extractiva ha generado numerosas resistencias sociales desde 2003 en adelante. Tal es así que, en su alianza con actores institucionales, las asambleas ciudadanas lograron que se sancionaran leyes que prohíben este tipo de minería en siete provincias argentinas. Durante años, el kirchnerismo logró mantener en los márgenes dichas protestas, encapsuladas en las provincias.¹⁰ Sin embargo, en enero de 2012, el cerco se rompió, gracias a la pueblada de Famatina, una pequeña localidad de la provincia de La Rioja, que ya había expulsado otras compañías mineras (entre ellas, a la Barrick Gold), la cual dotó de visibilidad pública a los conflictos contra la megaminería. La periferia se hizo visible en el centro, y al menos por un tiempo breve, durante 2012, las protestas tuvieron un eco a nivel nacional. Sin embargo, a la hora de abordar la cuestión de la megaminería, la entonces presidenta dejó en claro que esta era una parte fundamental y estratégica del modelo de Gobierno. Pese a ello, la pueblada de Famatina tuvo un efecto político y simbólico mayor (mucho más que la discusión sobre la Ley Nacional de Glaciares, de 2010),¹¹ pues puso al desnudo la alianza del Gobierno Nacional con las grandes corporaciones mineras.

Respecto de los hidrocarburos, la situación fue aún más problemática. En un contexto de restricción interna y externa, en 2010 la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en ese entonces en manos del grupo español Repsol, anunció el descubrimiento de hidrocarburos no convencionales en la formación geológica Vaca Muerta, ubicado en la región Patagónica de la Argentina. En 2012 el gobierno realizó la expropiación parcial (51% de las acciones) de YPF, que volvió así a manos del Estado argentino,¹² y dio inicio a un conjunto de transformaciones institucionales y políticas, planteando entre sus principales objetivos la explotación de hidrocarburos no convencionales como una manera de impulsar al conjunto de la producción nacional.¹³ Aunque se habló de modo grandilocuente de renacionalización, en julio de 2013 el Gobierno anunció un acuerdo con la compañía americana Chevron (la cual fue condenada

¹⁰ Esto se vio favorecido por el hecho de que, gracias a las reformas constitucionales de 1994, los recursos naturales pertenecen a la provincia, no al Estado Nacional.

¹¹ Desarrollamos el tema en Svampa y Viale (2014).

¹² Este había sido privatizada en los años noventa, bajo el gobierno de Carlos Menem, y contó, en ese entonces, con el apoyo de Néstor Kirchner, quien era gobernador de Santa Cruz, una provincia petrolera. La reforma incluyó la transferencia de la propiedad de los recursos del Estado nacional a las provincias; hecho que se extendió a los minerales.

¹³ Véanse Svampa y Viale (2014) y Bertinat et al. (2014).

por graves delitos ambientales y violación de derechos indígenas en Ecuador, cuando era Texaco), otorgándole grandes exenciones y beneficios en la explotación de hidrocarburos no convencionales, en la Cuenca del Neuquén. Esos acuerdos fueron secretos y, pese a los reclamos judiciales y las movilizaciones sociales, el Gobierno se negó a publicarlos.

En este contexto de renacionalización de YPF se tornó muy complicado romper el consenso que se estableció en torno del *fracking*. Aunque hubo numerosos cuestionamientos –organizaciones ambientales, asambleas y pueblos originarios– estos permanecieron en la periferia, ignorados en medio de la euforia eldoradista que promovió el Gobierno. Sin embargo, en un contexto de baja de los precios internacionales de los hidrocarburos, otro aspecto relevante fue el subsidio del Estado a las compañías petroleras, a fin de mantener el empleo en el sector.¹⁴ Al mismo tiempo, la caída del precio del crudo motivó la paralización de numerosos proyectos de explotación en Vaca Muerta.

En otro orden, el creciente acaparamiento de tierras, así como la especulación inmobiliaria en las ciudades, trajo consigo el aumento de los asentamientos urbanos (villas miseria). Por ejemplo, solo en la ciudad de Buenos Aires, entre 2003 y 2013, la población en asentamientos aumentó un 50 %. Dicha población, convertida en el blanco de las ‘políticas de seguridad’ de los gobiernos nacionales y municipales es también la sede de nuevos movimientos socioterritoriales, que se movilizan constantemente en las ciudades en demanda de tierra y de vivienda.

Por último, la expansión vertiginosa de las fronteras del capital, en clave extractivista, muestra el creciente proceso de arrinconamiento de los pueblos originarios, colocados en la periferia de la periferia. En 2006, a demanda de las organizaciones y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la realización de un relevamiento territorial. Sin embargo, este ordenamiento jurídico que se despliega en diferentes niveles (provincial y

¹⁴ Los subsidios al petróleo fueron implementados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante las resoluciones 14/2015 y 33/2015, “donde se dispuso una compensación económica a todas las compañías que extraigan o exporten crudo en Argentina; tales como YPF, Chevron, Pan American Energy, para garantizarles un precio interno de unos 75 dólares por barril, cuando en el mercado externo hoy pisa los 34 dólares”. <http://stripteasedelpoder.com/2015/12/macri-prorrogoria-los-millonarios-subsidios-a-las-petroleras-otorgados-por-el-kirchnerismo/>

nacional, siguiendo una normativa internacional), contrasta con la realidad. Para tener una idea de esto, nada mejor que recurrir al Informe final del relator sobre los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, quien visitó la Argentina en 2011 para recoger testimonios y denuncias de las comunidades. El informe da cuenta de un cuadro muy preocupante atravesado por el impacto ambiental, el impacto cultural, la fragmentación del tejido social, la falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT), los desalojos violentos, las situaciones de criminalización y represión, entre otros.

Asimismo, tal como afirma el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Odphi), la criminalización de los pueblos originarios no se da tanto en el ejercicio del legítimo derecho de protesta, sino cuando usan los derechos reconocidos jurídicamente (reclamo de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente). Los datos proporcionados por un informe realizado por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de 2012 (Encuentro Verdad, Memoria y Justicia, 2012) sobre criminalización de la protesta según sector, son alarmantes. Un relevamiento sobre 2 198 casos, ocurridos entre 2001 y 2012, señala que el 31,4 % del total corresponde a los pueblos originarios, esto es, casi un tercio del total, equiparando este al sector de las luchas sindicales.

Este preocupante panorama nos lleva a reflexionar acerca de la mutación de las formas de la violencia política en Argentina, y sus blancos predilectos. En los noventa eran los desocupados quienes aparecían como la ‘población sobrante’, hombres y mujeres descartados en nombre de la globalización neoliberal, cuyos cuerpos se rebelaron al destino de sacrificio y comenzaron a interrumpir las rutas del país. Hoy son comunidades enteras, entre ellas indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, los que devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la expansión del ‘progreso’. Frente a esto, vuelven aquellas preguntas que invocan la memoria larga, atravesada por el genocidio originario, acerca de cuál es el lugar que la Argentina contemporánea y los modelos de desarrollo hoy imperantes reservan a las comunidades y pueblos indígenas.

En suma, tomando en cuenta lo anterior, cabe señalar la disociación entre las agendas de derechos humanos abocadas a la temática del terrorismo de Estado y los juicios a los militares y la agenda de derechos humanos, ligadas a los impactos del

neoextractivismo en los diferentes territorios. Es cierto que este hiato entre ambas agendas fue potenciado por la desconexión existente entre luchas sindicales y luchas contra el extractivismo. Pero en líneas generales la relación directa entre neoextractivismo, política de concentración de la tierra y deterioro de los derechos fue uno de los puntos ciegos del Gobierno kirchnerista y, por sobre todo, de las organizaciones de derechos humanos ligadas al Gobierno.¹⁵ En este marco, no es casual que el kirchnerismo mantuviera ‘blindado’ el discurso progresista (generando así una suerte de progresismo selectivo) frente al carácter estructural de estas problemáticas, negando la responsabilidad del Gobierno Nacional y subrayaran, en contraste, el peso determinante de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.

4. Fin de ciclo e imágenes del ocaso

El ocaso del kirchnerismo no provino solamente del cuestionamiento de los nuevos actores sociales (los sectores sojeros y aliados en el campo económico y mediático) y de la fractura evidenciada en los sectores medios (puja intraclase), cada vez más críticos del modelo de concentración política ilustrado por el kirchnerismo, sino sobre todo del deterioro de los índices económicos y la ausencia de un reconocimiento real de estos. En 2007, la intervención del organismo nacional de estadísticas (Indec) dejó al país sin cifras confiables en relación con la inflación y los niveles de pobreza. El Gobierno comenzó a ocultar la inflación y a desconocer el incremento de la pobreza, pese a que organismos independientes señalaban que la inflación habría empezado a escalar desde 2008 en adelante, hasta llegar al 38 % hacia 2014 y 2015 (situando segundo a Argentina, después de Venezuela, en el contexto latinoamericano); mientras que la pobreza, por su parte, llegó a trepar hasta el 29

¹⁵ La excepción de este divorcio de las agendas de DD.HH. fue el rol siempre aglutinador del Servicio de Paz y Justicia, coordinado por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y de Nora Cortiñas, perteneciente a una de las corrientes de la asociación de Madres de Plaza de Mayo. Por otro lado, cabe agregar que, en los últimos años, hubo una tendencia a la tercerización de la represión, a través de la utilización de barras bravas, sindicatos, guardias blancas y sicarios contratados especialmente por latifundistas y propietarios sojeros (en el caso de diferentes provincias, como en Chaco, Formosa y Santiago del Estero).

% hacia el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner (Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina).

Hay que recordar que, desde los inicios del kirchnerismo, y en respuesta a las movilizaciones sociales durante la crisis, el Gobierno mantuvo una política de tarifas públicas bajas respecto de los servicios básicos, a través de subsidios millonarios a las empresas (trenes, subterráneos, colectivos, gas, electricidad), que con el paso del tiempo repercutieron sobre el déficit fiscal, que marcaría los últimos cuatro años de Gobierno. Asimismo, la crisis internacional, la posterior caída de los precios de los *commodities* y la dificultad para obtener préstamos en el mercado financiero internacional, debido al *default* declarado en 2002, complicaron aún más la economía del país. Uno de los signos más evidentes fue la disminución del crecimiento del empleo privado, que fue reemplazado por el incremento del empleo estatal. En 2014, con la idea de buscar nuevas líneas de crédito, saldó su deuda con el Club de Paris, lo que implicó un desembolso de USD 9 700 millones a pagar en cinco años, entre deuda e intereses (sumó más de USD 4 735 millones entre punitivos e intereses). Esta era una deuda activa que provenía de los ochenta, de los noventa y principios de los 2000. Sin embargo, el acceso a los créditos estuvo cerrado a raíz del litigio con los *holdouts*, que dejó al país en una virtual cesación de pagos.¹⁶

¹⁶ Durante la década de los noventa el endeudamiento se incrementó a un ritmo de USD 9 000 millones. Así, a fines de 2001 la deuda externa argentina era de USD 144 000 millones. La crisis de 2001 se originó, entre otras razones, porque el Gobierno Nacional no podría pagar ni siquiera los intereses de la deuda. En 2002 se declaró la cesación de pagos y el país entró en *default*. Sin embargo, en 2005, Argentina propuso un primer canje de deuda y logró una adhesión del 76 % en la reestructuración de esta. En enero de 2006, el país usó un tercio de sus reservas para saldar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 2010, el país anunció un segundo canje de deuda por valor de USD 20 000 millones para aquellos tenedores de fondos que no habían aceptado las condiciones de 2005. En esta ocasión el país obtuvo una adhesión del 66 %. Con los canjes de 2005 y 2010, Argentina alcanzó un nivel de adhesión total del 92,4 %, con una quita del 65 % de la deuda original. El 7 % restante se componía en un 85 % por fondos buitre y particulares sin residencia en los Estados Unidos, y solo el 8,3 % tenía un domicilio en ese país. En noviembre de 2012 se produjo el primer fallo de la Corte Federal estadounidense a favor de los fondos buitre, cuando el juez federal estadounidense Thomas Griesa sentenció a favor de los acreedores que se negaron a participar en los canjes ofrecidos por Argentina y a los cuales se debía ARS 1 330 millones con intereses. La presidenta no aceptó la decisión de la Corte de Nueva York y advirtió de que dicho fallo dejaba a Argentina al borde una nueva cesación de pagos. A partir de allí se iniciaría un largo y turbulento litigio, que no se cerraría durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino durante los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, quien aceptaría las

En suma, el deterioro de los índices macroeconómicos estuvo acompañado de medidas que acentuaron los desequilibrios (financieros, fiscales), a la par que se iba profundizando la precarización, la alta inflación, las consecuencias del cepo cambiario, la devaluación de 2013, la crisis desatada por la deuda en manos de los *holdouts* y la política impositiva regresiva, entre otros. Sin embargo, en el plano político esto iba sostenido por un discurso oficial acerca de que el kirchnerismo, en tanto ‘modelo de inclusión social’, no realizaría ‘el ajuste’ que el sistema parecía estar reclamando.

El fin de régimen se llevó a cabo en el marco de una fuerte concentración de poder político en el Ejecutivo, con una presidenta imposibilitada de sucederse a sí misma, que, sin embargo, buscó controlar hasta en los últimos detalles la campaña electoral de su sucesor (Daniel Scioli, entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires), designando candidatos por doquier y sumando en las cabezas de lista a miembros de la leal agrupación La Cámpora, en desmedro de dirigentes peronistas de larga trayectoria. En esa puja, el kirchnerismo buscó debilitar cualquier opción de centroizquierda o de liderazgo populista alternativo, empeñándose en colocar como contracara y rival privilegiado a Mauricio Macri, fundador del Pro (Propuesta Republicana), un partido de derecha nacido en 2005.¹⁷

Este escenario de *fin de ciclo* contribuyó a la derechización de la oferta electoral, visible en el balotaje de noviembre de 2015, donde la sociedad argentina tuvo que elegir entre Daniel Scioli, un representante de la derecha peronista conservadora, y Mauricio Macri, un representante de la derecha empresarial. La derrota del peronismo a nivel nacional y en las principales provincias (entre ellas la provincia de Buenos Aires) dejó a la luz tanto los groseros errores cometidos por el exoficialismo, en la búsqueda ciega de su

condiciones impuestas por el juez Griesa para saldar la deuda con los *holdouts*. En marzo de 2016 se cerró el acuerdo, que alcanzaría al 75 % del monto demandado. El dinero, unos USD 11 684 millones provendrían de una nueva colocación de títulos de deuda por parte de la Argentina, con vencimientos a 5, 10 y 30 años y una tasa de interés de entre el 7 y 7,5 % anual, lo cual acrecienta la deuda externa del país.

¹⁷ Importa subrayar que Macri llegó a la alcaldía de la ciudad de Buenos Aires, en 2007, favorecido por la división del peronismo, que presentó dos listas de candidatos, una de las cuales era apoyada por el oficialismo, que a su vez quitó el apoyo al entonces jefe de gobierno, J. Telerman, de trayectoria peronista, que encabezaba la segunda lista. En 2011, Macri fue reelegido como alcalde con el 47 % de los votos.

perpetuación, como la confusión entre alternancia política y alternativa, proveniente de vastos sectores de la sociedad argentina.

4.1 Giro a la derecha y luchas sociales

La alternancia inesperada vino de la mano del empresario y dos veces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien conformó Cambiemos, una alianza de su partido (Pro) con el tradicional partido radical (Unión Cívica Radical). Cumplido el primer año de gestión, el gobierno de Macri evidencia rupturas pero también continuidades respecto de la gestión saliente. En relación con las rupturas, hasta el 10 de diciembre de 2015, la Argentina estuvo gobernada por un progresismo que podríamos caracterizar como un populismo de alta intensidad, marcado por la concentración del poder político en el Ejecutivo, el sobreprotagonismo de ciertos sectores de clases medias y, por último, la subalternización –por diferentes vías– de amplias franjas de los sectores populares. La alternancia político-electoral implicó el pasaje hacia un escenario postprogresista, liderado por una derecha aperturista, con fuerte presencia de funcionarios que componen la elite empresarial, que ha ido implementando una política de ajuste o ‘sinceramiento’ (de la inflación, de las tarifas de los servicios básicos, del valor del dólar, del pago a los *holdouts*, entre otros), que favorece a los sectores más concentrados de la sociedad.

Ahora bien, es indudable que el Gobierno anterior dejó como herencia problemas profundos, entre los cuales se destacan el deterioro de los índices macroeconómicos, acompañado de medidas que acentuaron los desequilibrios (financieros, fiscales). Sin embargo, lejos de las promesas de ‘pobreza cero’ de la campaña electoral, los caminos elegidos por Mauricio Macri apuntaron a realizar un ajuste tradicional, que golpeó duramente a los sectores más vulnerables, tal como lo muestran en cómo se buscó implementar los ajustes de las tarifas de servicios, signado por la mala praxis y el escaso registro por parte del nuevo oficialismo de la diversidad social, regional y geográfica del país. Así, al compás de estas medidas, una proyección del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) para los primeros meses de Gobierno informaba del

incremento de un millón y medio de pobres como consecuencia de las políticas implementadas, lo que sumaría ya 13 millones de pobres (UCA, 2016).¹⁸

Por el momento, el espacio político del oficialismo es estrecho en términos de alianzas sociales, pues no queda claro –no estamos frente a una gestión consolidada– sobre qué sectores, además del bloque empresarial dominante, se apoyará el nuevo Gobierno, y qué estrategias y dispositivos de resubalternización implementará, en un contexto de ajuste, tanto respecto de las clases medias, que hoy ven amenazada la inclusión por el consumo (garantizada por el gobierno anterior), como respecto de las clases populares, ante las cuales parece ampliarse de modo vertiginoso el horizonte de la marginalidad y la exclusión.

En cuanto a la doble dinámica del capital (no solo respecto de la contradicción capital-trabajo, sino de la relación capital-naturaleza), es claro que el gobierno actual empeora la relación de asimetría del trabajo frente al capital, al fortalecer la opción por los mercados y perjudicar así a distintas franjas de trabajadores de las clases medias y, sobre todo, de trabajadores de los sectores populares. Al mismo tiempo, respecto de la relación capital-naturaleza se perciben continuidades, pues el nuevo oficialismo apuesta a profundizar la comoditización de la naturaleza por la vía de la expansión del extractivismo (agronegocios, megaminería, *fracking*, represas, urbanismo neoliberal), consolidando así la brecha socioambiental abierta durante el ciclo anterior.

En consecuencia, el escenario postprogresista indica una mayor conflictividad. En esta línea el conflicto sindical viene manifestándose en todas sus aristas y variantes (protestas puntuales, huelgas en el ámbito privado y público, movilizaciones generales de las diferentes corrientes sindicales), en un contexto –sobre todo en las provincias– de sucesivas represiones y encarcelamiento de activistas. Así, el postprogresismo facilitaría un contexto de ‘unidad en la lucha’, más allá de las heridas políticas abiertas durante el período kirchnerista, tal como lo muestran las dos CTA (de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, y Autónoma, por Pablo Micheli), que han realizado conjuntamente varias movilizaciones, tanto para repudiar los hechos de represión y criminalización

¹⁸ El nuevo informe, de agosto de 2016, señala el aumento de “nuevos pobres” como un “dato preocupante que no dejó de ser una estimación conservadora”.
<http://www.lanacion.com.ar/1927350-para-la-uca-crece-la-cantidad-de-nuevos-pobres>.

(especialmente la encarcelación de la dirigente social Milagro Salas), así como el veto presidencial a la Ley de Emergencia Ocupacional, conocida como ley antidespido. Por otro lado, las tres CGT existentes realizaron el 22 de agosto un congreso de reunificación para garantizar una transición por la vía de un triunvirato, luego del alejamiento de Hugo Moyano. Pese al gran malestar que existe en las bases, las negociaciones abiertas con el gobierno de Macri colocan dudas sobre el interés de algunos jefes sindicales ligados a las CGT en apelar a la pura lógica de movilización, previendo la ingobernabilidad que esto podría conllevar en el marco del nuevo Gobierno, que además de no estar consolidado, no cuenta con mayoría parlamentaria.

Por otra parte, respecto del extractivismo, el gobierno de Macri avanzó sobre varios frentes, aunque sin discursos vergonzantes. Así, eliminó las retenciones a la minería y disminuyó las de la soja, transfirió la Secretaría de Minería al nuevo Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex CEO de Shell y creó un Ministerio del Ambiente, donde nombró alguien que confiesa no saber nada del tema, pero que recorre el país defendiendo la megaminería. Asimismo, continúa con el subsidio a las petroleras y, pese al fallo de la justicia, se niega a publicar el convenio entre YPF y Chevron, al tiempo que promete un plan energético que impulsaría la diversificación de la matriz energética (eólica), aunque sin cambios en el sistema energético.

Por último, el Gobierno suele hablar del “cambio climático” y de “participación ciudadana”, aunque en realidad la narrativa del cuidado del ambiente es una fórmula vacía, ligada a una cultura del *marketing* y unos pocos eslóganes efectistas, más que a una propuesta de discusión integral sobre las consecuencias socioambientales, culturales y políticas, de los actuales modelos de desarrollo.¹⁹ Un ejemplo ilustrativo es lo que sucede en Jachal, San Juan, donde la vía judicial y la institucional han sido bloqueadas: por un lado, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa contra la empresa Barrick por el derrame de cianuro sucedido en septiembre de 2015, fue oportunamente

¹⁹ La problemática de la matriz debe ser entendida en el marco del sistema energético, el cual se caracteriza por su multidimensionalidad. Así, un modelo energético superador requiere no solo diversificación de la matriz, sino, entre otras cuestiones, descentralización y regionalización de la generación, transporte y consumo de la energía, así como el creciente control comunitario del sistema energético (Bertinat, 2016).

desviada a la complaciente Justicia de la provincia. Por otro lado, por presión de los sectores mineros y del propio gobernador, se impidió dar vía libre a la consulta ciudadana que reclama la población. En fin, el nuevo oficialismo y sus aliados repiten y empeoran la historia legada por el progresismo kirchnerista, cerrando incluso las vías de la institucionalidad a los reclamos socioambientales más urgentes de las poblaciones.

Pese a la adversidad, en el frente socio-eco-territorial hay que destacar la acumulación organizativa producto de las resistencias durante la década kirchnerista, traducida en la consolidación de numerosos colectivos asamblearios y en la visibilización de los reclamos territoriales de los pueblos originarios, frente al avance de las fronteras del extractivismo y del acaparamiento de tierras. Aunque son conflictos que suelen situarse en la periferia (respecto de los conflictos sindicales, de carácter más central), su ingreso a la agenda nacional, siempre transitorio y fugaz, tiende a ser más relevante que en los años anteriores. Algunos triunfos, como el de la suspensión definitiva de la construcción de la planta de semillas en la localidad de Malvinas, por parte de Monsanto, en Córdoba, tienen como contracara el avance de una Ley de Semillas en el Congreso, donde lo que está en juego parece ser la cuestión del patentamiento (que enfrenta a corporaciones locales con Monsanto) y no el paquete tecnológico (transgénicos más glifosato), desestimando las graves denuncias en cuanto a los impactos sociosanitarios del modelo de agronegocios. Por último, en un marco de empobrecimiento y de temor a la recesión, existe el peligro –o la tentación– de asistir a un contexto de ‘unidimensionalización’ de las resistencias, aun si en la actualidad se registra una conexión mayor entre ambas líneas de acumulación, la sindical-urbana y la socioambiental, esto es, entre centros y periferias, respecto de la conflictividad social.

Lo más notorio del escenario postprogresista es el creciente protagonismo de las organizaciones socioterritoriales, asociadas a la demandas de paz, pan, techo y trabajo. La movilización multitudinaria arrancó el 7 de agosto, el día de San Cayetano, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, y marcó el retorno de los barrios a la política nacional, luego de una década de subalternización, bajo el modelo kirchnerista, que había logrado el control sobre diferentes organizaciones territoriales, gracias la combinación entre planes sociales, clientelismo afectivo y oportunidades de consumo. Probablemente estemos frente a un

nuevo desborde plebeyo, que viene de la mano de organizaciones de raigambre piquetera, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie (Libres del Sur) y la heterogénea Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), un nuevo espacio conformado en 2015, que es un reagrupamiento de movimientos sociales territoriales, con fuerte presencia del Movimiento Evita (que abandonó recientemente el espacio kirchnerista), de empresas recuperadas, campesinos, cartoneros y otras organizaciones territoriales urbanas.

Sin embargo, este –nuevo– desborde de los barrios pone en evidencia otros problemas, puntos ciegos no tratados durante el ciclo kirchnerista, que dejan en evidencia la fragilidad actual del mundo popular. Así, el desborde popular viene a alertar sobre los alcances del narcotráfico en los barrios y su capilaridad, a través de la captación de los más jóvenes, que terminan siendo carne de cañón.²⁰ En realidad, hace varios años que diferentes organizaciones sociales (sobre todo no kirchneristas) vienen denunciando la disputa cada vez más asimétrica en los barrios, a raíz de la expansión de bandas de narcotráfico y redes delictivas, que van desplazando –por la vía de la amenaza y la acción violenta– a las organizaciones sociales. Por ello no es casual la presencia de la Iglesia católica (con sus curas villeros, alentados por el papa Francisco), en esta lucha desigual por el control territorial, donde lo que está en juego es la reconfiguración de las subjetividades populares. En suma, las organizaciones territoriales que vuelven a asomar con su potencia plebeya en el espacio político nacional no son solo fruto de la acumulación, expresión de una interpelación al Estado frente al hambre y la amenaza de desocupación, sino también una lucha agónica de cara al narcotráfico, el cual sin dudas echaría más raíces en un contexto de mayor empobrecimiento.

A este panorama social cabe agregar otros elementos, pues, contrariamente a lo esperable, tampoco hubo una despolarización del campo político. En realidad, el gobierno de Cambiemos exacerbó la brecha, a través de la implementación de una política de

²⁰ Véanse las interesantes reflexiones de Rita Segato sobre la estatalidad, ligada no solo a la violencia sobre las mujeres, sino a la relación territorialidad-narcotráfico (2014).

revancha, con despidos que alcanzaron áreas relevantes del Estado e involucran personal de planta, y del desmantelamiento de diferentes programas sociales y de inclusión cultural. Por otro lado, lejos de la autocrítica, pese a los casos de corrupción probados que involucran importantes exfuncionarios, las reacciones del kirchnerismo van también en el sentido de la profundización de la brecha. La tentativa, por parte de un kirchnerismo militante de clases medias urbanas identificado con el modelo progresista anterior, de seguir hegemonizando ciertos aspectos de las luchas (a través de los ‘ruidazos’ contra el tarifazo y las movilizaciones a favor de la expresidenta) se repiten, aun si su conexión con el mundo sindical y el universo deteriorado de los sectores populares plebeyos es casi nulo.

4.2 ¿Hacia una nueva sociedad excluyente?

A un año de la gestión de Cambiemos, si bien es cierto que no se trata de un Gobierno consolidado, pues no cuenta con mayoría parlamentaria y además tampoco construyó –no todavía– un esquema de resubalternización atractivo para los sectores medios (que debieron ajustarse en términos de consumo) o eficaz en relación con los sectores populares (en un contexto de aumento de la pobreza), los resultados no pueden menos que producir una suerte de escalofrío.

Asimismo, aunque la ruptura introducida por el nuevo Gobierno no significa una vuelta lineal al neoliberalismo, tanto el aumento acelerado de la pobreza como el ingreso a un escenario más desigualador y decididamente aperturista han reactivado el fantasma de la polarización social, propia de los años noventa. Además, el fin de ciclo y el inicio de una nueva época es visible en la cosmovisión que este trasmite cuando aborda temas cruciales como la seguridad, los mercados, el rol de las corporaciones, el endeudamiento, la protesta social, la educación, y la relación entre lo privado y lo público, entre otros. Una cosmovisión que refrenda núcleos centrales del neoliberalismo, pero que además vehicula un *aggiornamento* social y territorial, cuyas aspiraciones pueden llegar a instalarlo en el campo del populismo conservador.

Por otro lado, los efectos de contrapoder de parte de una sociedad movilizadada, con un fuerte lenguaje de derechos, en sus diferentes frentes y líneas de acumulación (socioterritorial, sindical, socioambiental) se han hecho sentir notoriamente, por encima de

las diferentes narrativas de cambio. Asimismo, como he señalado al inicio de este artículo, el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en los sectores medios y populares, los cuales habrían marcado una reversión de las tendencias excluyentes propias de los años noventa, al menos entre 2006 y 2011, época a partir de la cual el sostenido aumento de la inflación, el estancamiento en la creación de empleo privado, así como las políticas económicas implementadas potenciaron la crisis económica y trajeron como consecuencia, sobre todo en relación con los sectores populares, una licuación de las mejoras logradas.

En suma, en muy poco tiempo el giro a la derecha logró reavivar uno de los traumas sociales más dolorosos que recorre la sociedad argentina, sobre todo desde los años noventa: el fantasma del ‘retroceso social’ (desempleo, descolectivización, movilización social descendente) en sectores populares y ciertos sectores medios. Asimismo, el nuevo ciclo político muestra una sociedad visiblemente dañada, que difícilmente vaya a ser reparada en el marco de la alternancia planteada. No solo porque en ese juego perverso que durante años jugaron tanto el oficialismo como la oposición salieron a relucir los peores sentimientos de la sociedad y de la clase política argentina, sino porque además el kirchnerismo dejó como legado una herida política y cultural que beneficia a las derechas en boga, en detrimento de las izquierdas y centroizquierdas partidarias, hoy colapsadas o divididas, que tarde o temprano tendrán que asumir el desafío de reinventarse.

Ahora bien, el fin del ciclo anterior y el ingreso a una nueva época no significa, como busca alimentar cierta mirada ingenua y mistificada sobre el docenio kirchnerista, el abandono de un ‘país igualitario’ (el ‘mundo feliz peronista’, ‘la década ganada’), pues la reducción de la pobreza no fue acompañada por la disminución de las desigualdades. Desde mi perspectiva, durante el ciclo kirchnerista la Argentina estuvo lejos de ser un país igualitario: descendió la pobreza y hubo una inclusión por el consumo, al menos hasta 2011, pero las desigualdades se mantuvieron; se acentuó la concentración económica y no hubo una reforma tributaria progresiva. En consecuencia, no es que a partir de diciembre de 2015 los argentinos abandonamos el *mundo feliz peronista* para comenzar a transitar una vez más *la larga noche neoliberal*.

Asimismo, frente a las abrumadoras denuncias por hechos de corrupción, tampoco es posible caer en simplificaciones para reducir el kirchnerismo a una pura matriz de corrupción, pues este instituyó una agenda de derechos, que abarcó desde los juicios a los genocidas, la asignación universal por hijo, la estatización de las AFJP, hasta las leyes en favor de la diversidad sexual. Agenda importante pero parcial, pues también obturó de modo interesado y sistemático otras agendas de derechos, ligadas a las luchas de los pueblos originarios, a la crítica al extractivismo y los derechos ambientales, a la precariedad laboral, a la demanda de tierra y vivienda, cuestiones que lejos de ser asignaturas pendientes, se instalaban -y aún se instalan- en el núcleo duro de los modelos de desarrollo, al tiempo que alimentó la concentración del poder político en manos de la expresidenta, ocultando el deterioro de los indicadores sociales y económicos y profundizando la derechización de la oferta electoral.

Finalmente, hay que ser conscientes de que el retorno de la polarización social y la movilidad social descendente, en un contexto de por sí tan amenazante y complejo para el mundo popular, donde se potencian narcotráfico, violencia y exclusión, instala la posibilidad del ingreso –no ya el retorno– a una situación de intemperie donde podrían forjarse los marcos de una nueva *sociedad excluyente*. Sin embargo, aunque este contexto postprogresista presenta un horizonte difícil, 2016 es muy diferente a 1990: ciertamente, como en otros países de la región, existen en Argentina diferentes líneas de acumulación de las luchas, con sus gramáticas políticas y su lenguaje de derechos, que continúan formando parte del acervo de las clases subalternas en el país.

Bibliografía

- Aranda, Darío. ‘La década extractiva, Informe especial’, 25/05/2013,
<http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html>
- Benza, Graciela. ‘La estructura de clases durante la década 2003-2013’, en Gabriel Kessler (comp.), *La sociedad Argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura* (comp.), Siglo XXI-OSDE, Buenos Aires, 2016.
- Bertinat, Pablo. ‘Otra energía es posible’, 2013, disponible en
<http://www.enredando.org.ar/2013/07/29/no-podemos-discutir-politicas-energeticas-sin-discutir-el-modelo-de-desarrollo/>.
- Bertinat, Pablo, Eduardo d’Elia, Roberto Ochandio, Observatorio Petrolero Sur, Maristela Svampa y Enrique Viale. *20 mitos y realidades del fracking*. Editorial El Colectivo, Buenos Aires, 2014.
- Binstock, Georgina, y Marcela Cerrutti. ‘La población y la estructura social’, en Gabriel Kessler (comp.), *La sociedad Argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura* (comp.), Siglo XXI-OSDE, Buenos Aires, 2016.
- Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Informe sobre Criminalización de la Protesta, 2012, disponible en <http://encuentromvyj.org/criminalizacion-de-la-protesta/>
- Gras, Carla y Hernández, Valeria (coords.). *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios* Biblos, Buenos Aires, 2009.
- , *El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización*. Biblos, Buenos Aires, 2013.
- Katz, Claudio. ‘La economía desde la izquierda’, Anred, 2013, disponible en
<http://www.anred.org/spip.php?article7099>
- Kessler, Gabriel (comp.). *La sociedad Argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura*. Siglo XXI-OSDE, Buenos Aires, 2016.
- Sagato, Rita. *Las nuevas formas de la violencia y el cuerpo de las mujeres*. Ediciones Tinta Limón, Buenos Aires, 2014.
- Svampa, Maristela, y Enrique Viale. *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Ediciones Katz, Buenos Aires, 2014.
- Universidad Católica de Argentina (UCA). ‘Pobreza y desigualdad por ingresos en la

Argentina 2010-2015', 2016, disponible en
urbana[http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-
Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana.pdf](http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana.pdf).